



**ABYA YALA.-** Diversos referentes sociales, indígenas, ambientales, académicos, artísticos y de comunicación de todo el continente **alertan a las Naciones Unidas y a la**

**Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

acerca de la situación de emergencia humanitaria que se vive en Colombia y en varios países que comparten problemática, como Guatemala, Honduras, Perú, Argentina y Chile.

En la comunicación presentada, las organizaciones **conminan a los diversos organismos de Derechos Humanos a actuar decididamente para salvaguardar los derechos indígenas** y acabar con la espiral de violencia que padecen los pueblos y comunidades que están defendiendo sus territorios frente a la imposición de los grandes proyectos extractivos, agroindustriales y energéticos.

Con respecto a la **situación colombiana**, las organizaciones dan cuenta de la destrucción de viviendas, desplazamiento de la población, sistemáticos asesinatos y heridos, mientras que, de manera paralela, se siguen imponiendo megaproyectos de industrias extractivas con intereses de transnacionales, como mineras y petroleras. “Frente a esto, resulta insólito, por utilizar un término, que el conflicto armado ha servido de “justificación” para desconocer derechos colectivos a las comunidades, violar tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT y anular poblaciones locales”. Señalan además que **estos hechos de violencia se han producido en lugares donde coincidentemente se han instalado o se pretenden instalar los principales proyectos** de este tipo de mega industrias, según se ha venido denunciando desde las propias comunidades.

**Se considera también preocupante que esto suceda bajo la pasividad y complicidad de organismos internacionales de Derechos Humanos.** Y que sus reacciones se produzcan a posteriori y de manera extemporánea, cuando los delitos y abusos ya se han materializado y han ido en contra de los derechos a la libertad, a la integridad personal y a la vida. Ante esto, se solicita respetuosamente “un rol más activo ante esta realidad y conminamos a una mayor observancia e involucramiento y coordinación con otras instancias para la protección efectiva de los Derechos Humanos en Colombia, así como en los otros países donde se continúan atropellando derechos”.

En otro párrafo de una misiva mencionan: “Continuando sobre la situación en Colombia y muy particularmente con respecto a los llamados “**diálogos de paz**” que tanta atención mediática ha recibido, debemos señalar que

**la presencia y acciones de estos actores armados continua afectando a territorios**

### indígenas

, afrodescendientes y campesinos, que los resguardos indígenas continúan militarizados, que persisten las acciones bélicas en espacios donde viven familias al interior de las comunidades; siguen los enfrentamientos entre los grupos armados militares y la “guerrilla”, persiste la amenaza y se mantiene latente en ciertos sectores, la presencia de grupos paramilitares que son mercenarios vinculados a individuos que actúan como poderes fácticos en el estado, pero nada de esto se menciona en la prensa, como tampoco se hace mención de las muchas y reiteradas oportunidades en que los pueblos indígenas han adelantados gestiones y solicitado la paz, no solo en sus territorios, sino para todo el país y el continente”.

Entre las organizaciones internacionales adherentes se encuentran, además de la CODPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Consejo Indígena de Centro América (CICA), junto a referentes de más de 10 países.

El comunicado alerta también sobre la situación extremadamente complicada por la que están atravesando otros países de Abya Yala.



En **Guatemala**, se denuncia la política de militarización, represión y criminalización del gobierno de Otto Pérez Molina en contra de las luchas del pueblo de Guatemala, y se repudia la masacre ejecutada por el Ejército y Policía Nacional de Guatemala el 4 de Octubre 2012 en contra de los 48 cantones de las comunidades Mayas K'iche' de Totonicapán en donde fueron asesinados 8 comunitarios y más de 40 heridos.

En **Honduras**, se denuncia la política de continuidad del Golpe de Estado que el actual Gobierno del presidente Lobo ejerce contra la voluntad de la mayoría del pueblo, que en los últimos años ha sufrido cientos de asesinatos y donde la libertad de prensa ha sido casi aniquilada, con más de 16 periodistas asesinados en los dos últimos años. Se repudia también la sistemática violencia estatal y privada contra la población campesina del Bajo Aguán que defiende su territorio frente al avance de las plantaciones de palma africana; y se condena el asesinato de tres pobladores garífunas a manos de guardias privados del empresario Miguel Facusse, en el departamento de Colón.

En **Chile**, se repudian las políticas de violencia, represión, militarización de fuerzas especiales y operativas de la policía en comunidades y familias y la judicialización del Estado chileno en contra de las movilizaciones de comunidades Mapuche que exigen reparaciones de tierras ancestrales o bien, por la defensa del territorio ante la amenaza de proyectos de inversión de mega industrias o su expansión. Se condena también la impunidad de los policías que asesinaron a los jóvenes Mapuche desarmados Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, en el marco de reclamaciones de tierras. A su vez, se solidarizan con los presos políticos Mapuche que se encuentran en huelga de hambre.



En **Perú**, se lamenta la larga lista de comuneros y campesinos que han sido asesinados por defender tierras y aguas en el marco de las reclamaciones en contra de la actividad extractivista minera. Al respecto, se rechaza el Decreto Legislativo 1095, en vigencia desde septiembre de 2010, que propicia el abuso de agentes estatales represores y extiende la competencia de la justicia militar.

En **Argentina** se denuncia el asesinato de 10 líderes indígenas en los últimos años ocurridas

en el marco de las reclamaciones por tenencia de tierras y de protesta al modelo depredador de monocultivos, hechos cometidos por particulares y agentes policiales y con responsabilidad directa de las gobernaciones.

Puedes acceder al comunicado completo [aquí](#) .